

revista
Nº. 78

DEBATES

▪ SEPTIEMBRE/DICIEMBRE/2017 ▪ UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

ISSN 1657-429X

De memorias y olvidos

Las huellas del conflicto armado en la ciudad

Cinco analistas políticos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia presentan su visión del informe Medellín: memorias de una guerra urbana. Los investigadores escudriñan capítulo a capítulo el Medellín ¡Basta Ya! que el Centro Nacional de Memoria Histórica, con el concurso de organizaciones públicas y privadas y las universidades Eafit y de Antioquia, publicó en 2017 sobre las violencias que padeció la ciudad en el marco del conflicto armado.

La memoria que nos hace falta

... es necesario generar un equilibrio entre el olvido y la memoria, principalmente en los procesos de memoria colectiva, para facilitar así la transmisión y la recepción del conjunto de valores y creencias que hacen parte de la identidad y el destino de una sociedad.

(Especial para DEBATES del proyecto Memoria Histórica, un convenio de la Deutsche Welle Akademie y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia)

Paz, democracia y educación. Reflexiones en tiempos de crisis

Es necesario un proceso de justicia social redistributivo si queremos eliminar las razones estructurales que llevaron a la violencia. Es cínico, irresponsable y antipatriótico amenazar con más violencia si se le da a la propiedad privada su función social constitucional.

Modalidades y repertorios de violencia¹

Por **María Ochoa Sierra**
Profesora del Instituto de Estudios Políticos
Universidad de Antioquia

Introducción

El informe *Medellín: memorias de una guerra urbana*, surge como una necesidad identificada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, de crear un “relato sistemático” (p. 18) de las formas que han tomado las violencias y el conflicto armado en la ciudad entre 1980 y 2014, con un especial énfasis en las memorias de las víctimas (p. 39). Hace parte de otras narrativas que recuperan las memorias plurales del conflicto armado, como una contribución a la “reparación integral, el esclarecimiento histórico, las garantías de no repetición y la construcción de una paz sostenible” (2017), resultado de un proceso largo en el país de reconocimiento de las víctimas y de emergencia de la memoria como problema de interés nacional y recurso de denuncia y resistencia (p. 37). El informe establece algunos consensos sobre el conflicto armado colombiano: prolongado, complejo por la pluralidad de actores involucrados, discontinuo y con marcadas diferencias regionales (p. 20). De ahí que sea importante resaltar por qué, entre tantos casos del país, Medellín tiene una historia particular.

De acuerdo con el informe, los factores determinantes en el conflicto armado y las formas de violencia que ha vivido la ciudad son el narcotráfico, las demandas no satisfechas de la población, la respuesta estatal diferenciada (en unos casos como actor del conflicto armado y en otros con una relativa indiferencia frente a la difícil situación de buena parte de la población víctima de estas vio-

El acontecimiento que da entrada a la próxima periodización y sus modalidades de violencia asociadas al conflicto armado, pero entrecruzadas con el narcotráfico y el crimen organizado (p. 169), es el surgimiento del MAS (Muerte a Secuestradores), que conduce su accionar al exterminio de personas consideradas por ellos como indeseables (habitantes de calle, consumidores de drogas, prostitutas, población LGBTI), y contra la insurgencia. ”

lencias), las crisis económicas (1982-1985, y 1998-2001), y las prácticas sociales e institucionales asociadas a la ilegalidad. Esto ha contribuido a que en Medellín la “magnitud y cercanía” de las violencias sea de alta intensidad (p. 32-34).

Esta reseña se ocupa del capítulo *Modalidades y repertorios de violencias* asociadas al conflicto en la ciudad. En el capítulo se identifican cuatro períodos de acuerdo con las modalidades de violencia: “las violencias selectivas y el desafío revolucionario (1965-1981); la guerra sucia y la turbulencia (1982-1994); las disputas territoriales y la urbanización de la guerra (1995-2005); y la reorganización de la criminalidad (2006-2014)” (p. 164). Estas modalidades están marcadas por la magnitud de la guerra, los actores involucrados, las acciones de esos actores (o diferentes formas o tipos de violencias), y los daños directos e indirectos generados.

Las violencias selectivas y el desafío revolucionario (1965-1981)

El informe establece que para este período las “violencias asociadas a la criminalidad” son todavía incipientes y que la relación entre el conflicto armado nacional y el local no es tan estrecha (p. 165). El hito de esta etapa es el Estatuto de Seguridad Nacional decretado por el presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), que marca una tendencia con respecto a la percepción sobre las organizaciones de izquierda, a violencias “acotadas y regentadas por el Estado”, mediante departamentos como el B2, F2, DAS y DOC (Departamento de Orden Ciudadano) (p. 168), y a formas de “violencia propiamente política” y de “impugnación política” en la que los actores principales son los grupos guerrilleros (p. 166).

La baja magnitud de las cifras de víctimas habla de la escasa presencia del conflicto armado en la ciudad. Entre 1976 y 1981 se registran 150 víctimas relacionadas con el conflicto armado interno asociadas a “violencias discriminadas y selectivas de baja intensidad” y las modalidades incluyen “asesinatos selectivos, amenazas, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, secuestros extorsivos y políticos, ejecuciones extrajudiciales”, y formas de justicia de retaliación (p. 167).

El acontecimiento que da entrada a la próxima periodización y sus modalidades de violencia asociadas al conflicto armado, pero entrecruzadas con el narcotráfico y el crimen organizado (p. 169), es el surgimiento del MAS (Muerte a Secuestradores), que conduce su accionar al exterminio de personas consideradas por ellos como indeseables (habitantes de calle, consumidores de drogas, prostitutas, población LGBTI), y contra la insurgencia.

La guerra sucia y la turbulencia (1982-1994)

Este período se caracteriza por la pluralidad y superposición de violencias en la ciudad (p. 169), lo que marca un cambio en las dinámicas del conflicto armado interno y especialmente en su legibilidad.

Se narra como un “período caótico y confuso”, “turbulento” (p. 184). De 150 registros de víctimas en el período anterior, pasamos a 11.249 entre 1982 y 1994 (p. 171); los jóvenes son los más vulnerados, así como también los principales actores del conflicto armado, una generación perdida en la que los sobrevivientes cuentan casi todos sus primos, amigos o coetáneos asesinados. Este período se identifica con lo que se conoce como la “guerra sucia”, y hace referencia a la persecución de dirigentes de izquierda, miembros de organizaciones comunitarias, estudiantes y profesores de universidades públicas, sumado a la confrontación entre narcotraficantes extraditables y el Estado, la proliferación de milicias en la ciudad (p. 171), la expansión de las guerrillas y la consolidación del paramilitarismo (p. 173). Modalidades como la desaparición forzada, las masacres, el desplazamiento forzado y el asesinato selectivo aumentaron considerablemente (p. 172).

Para ejemplificar, puede decirse que en 1987, recordado como un año fatídico, son asesinados quince profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia, cinco en julio y cinco en agosto (p. 173); en ese mismo año asesinan a dos sindicalistas reconocidos, a tres militantes de organizaciones de izquierda, y masacran a seis personas de la Juventud Comunista, lo que da una idea de la zozobra que se podía experimentar en determinados grupos sociales en aquel momento, como consecuencia de formas de violencia ejemplarizante con un fin aleccionador (p. 187).

Por otro lado, las organizaciones armadas de izquierda también aumentan sus acciones en contra de quienes consideran sus enemigos, o enemigos de la causa revolucionaria (“violencia de carácter retaliador” (p. 187)), desde miembros de la Fuerza Pública hasta líderes sociales (p. 174). Las milicias, asociadas en algunos casos a estas guerrillas, se vuelven un actor comunitario para la resolución de conflictos y sobre todo “una oferta de seguridad” frente a la sensación de desprotección de los habitantes (p. 186).

A esto se suma la violencia del narcotráfico y la figura de Pablo Escobar como una síntesis de ella, en la que la persecución contra la Policía (153 policías muertos en tres años) (p. 181), y la rama judicial es sistemática, y las acciones predominantes son los atentados terroristas y los secuestros extorsivos (p. 179). Estas formas de “victimización indiscriminada” tienen su mayor apogeo entre 1988 y 1993, lapso recordado como “la época de las bombas” (p. 180).

La amenaza continua a los representantes del orden público demuestra la capacidad de este actor armado para desestabilizar la ciudad y atacar a quienes no se consideran vulnerables; tiene además un efecto insospechado y es que la población recurre a la justicia privada frente a lo que interpreta como una incapacidad de los garantes legítimos del orden. Las demarcaciones estrechas del territorio asociadas a grupos con capacidad limitada alimentan la proliferación de asociaciones delictivas. A su vez, los atentados terroristas alcanzan a la élite citadina, que percibe por primera vez la desprotección y muchas de las formas de victimización del conflicto armado (p. 182).

Por otro lado, las organizaciones armadas de izquierda también aumentan sus acciones en contra de quienes consideran sus enemigos, o enemigos de la causa revolucionaria (“violencia de carácter retaliador”, desde miembros de la Fuerza Pública hasta líderes sociales. ”

Que el desplazamiento forzado e intraurbano sea la modalidad de victimización más extendida durante este período muestra por lo menos dos cosas: que la estrategia de terror del período anterior tiene un efecto concreto, prolongado y verificable, y que la afectación de la violencia es mayor cuando el territorio se disputa que cuando un actor es preponderante en él y se establece cierta calma asociada a un orden local. ”

La “limpieza social”, forma de exterminio de sujetos considerados indeseables, es una estrategia implementada en este período por diversos actores armados legales e ilegales (p. 185), así como comunitarios, para establecer un orden por medio del control absoluto, o la exclusión radical. En el informe se documentan seis organizaciones diferentes dedicadas a este fin. El desprecio por la vida de ciertas personas que manifiesta este tipo de violencia se alude en los testimonios documentados: “se mataba por matar” o “se llevaban por llevar” (p. 185), narraciones de un sinsentido de las violencias. La gente no logra percibir o entender una estructura justificable y coherente en ellas.

La conclusión significativa de este período es que el conflicto armado tocó a sectores que antes habían sido inmunes, y que los actores armados no tenían temor de proceder frente a personas que no eran una amenaza directa. Los efectos del terror fueron los éxodos masivos y un detrimento o “desmonte” en el liderazgo de procesos sociales y comunitarios (p. 176) que se habían fortalecido en la década de 1970. Tal vez la modalidad que mejor expresa este período fue la desaparición forzada (p. 178) y la idea de “carros fantasmas” que podían llevarse a las víctimas en cualquier momento (p. 183).

Las disputas territoriales y la urbanización de la guerra (1995-2005)

Las disputas y pretensiones de control territorial en esta década se imbrican con formas de acción legal e ilegal y dejan 52.004 víctimas registradas. Los actores centrales son los locales que cooptan para su servicio a combos o bandas, y están representados de un lado por las Convivir (Cooperativas de Vigilancia y Seguridad) y de otro por las milicias. Las acciones de guerra en la ciudad corresponden a la competencia armada entre “guerrillas, milicias, bloques paramilitares y fuerza pública” y marcan la afectación en este período (p. 189). En esta década aumenta de manera exponencial el desplazamiento forzado (especialmente intraurbano) y de manera más mesurada pero significativa “los asesinatos selectivos a líderes barriales, las masacres, la violencia sexual, las amenazas, la tortura y el despojo de propiedades” (p. 197) y el secuestro, que ahora tiene como víctimas a personas de clase media y en algunos casos de clases populares.

Que el desplazamiento forzado e intraurbano sea la modalidad de victimización más extendida durante este período muestra por lo menos dos cosas: que la estrategia de terror del período anterior tiene un efecto concreto, prolongado y verificable, y que la afectación de la violencia es mayor cuando el territorio se disputa que cuando un actor es preponderante en él y se establece cierta calma asociada a un orden local. La magnitud del daño es proporcional a la dificultad de identificarlo e indisoluble de la pluralidad de violencias superpuestas: conflicto armado, narcotráfico y crimen organizado.

Los territorios en disputa se caracterizan por un recambio poblacional y una alta afectación de los civiles en el conflicto a quienes se asume como posibles colaboradores por las relaciones que sostienen

con los actores armados (familiares, de compadrazgo, de amistad, de pareja, en todo caso de conocimiento e intercambio cotidiano). Esa violencia ocurrida entre prójimos (Theidon 2004 citada en CNMH, 2017) desata nuevas conflictividades barriales que se entrecruzan con las del conflicto armado interno. Violencias privadas que se mezclan con las públicas (p. 214).

Mientras tanto los bloques paramilitares retoman los territorios disputados y se articulan con reductos del narcotráfico, se enfrentan entre sí y con las milicias para dominar la ciudad (p. 190). Esta disputa territorial arrecia la violencia en los barrios agobiados y afecta la confianza entre vecinos por el carácter de sospecha latente que supone la disputa.

Por su parte, la Fuerza Pública ejecuta operaciones militares en la ciudad (se cuentan seis sólo en la comuna 13 entre 2001 y 2002) con el fin de acabar con las milicias. No obstante, estas operaciones vinculan elementos ilegales y afectan de manera considerable a la población civil. Como resultado de estas operaciones se documenta en el informe a quince muertos, 146 detenidos y 74 heridos (p. 193). A estas cifras se suma la Operación Orión en este misma comuna, en la que 1.500 hombres de la Fuerza Pública irrumpen en la comuna y dejan un saldo aproximado de 179 detenidos, 120 casas vacías, 50 civiles heridos y 14 muertos (El Colombiano, 217).

La reorganización de la criminalidad (2006-2014)

Estos años están definidos por la derrota de las guerrillas en la ciudad y la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, lo que conlleva un reordenamiento de la criminalidad en la ciudad y el aprovechamiento de estructuras de crimen organizado que deja un saldo de 68.310 víctimas asociadas al conflicto armado y el tránsito a la inseguridad (p. 201).

Durante este período decrecen otras modalidades de victimización, aunque aumenta el desplazamiento forzado e intraurbano, resultado de la desaparición forzada, los asesinatos selectivos, los enfrentamientos, el reclutamiento de menores, los toques de queda, las fronteras invisibles. El miedo y la sensación de desprotección contribuyen a que las modalidades de violencia simbólica sean más efectivas, bastando la amenaza para instaurar el orden (p. 204). Así mismo, se relata en el informe la pervivencia de violencias inscritas en la guerra, violencia estatal asociada a la violencia política y el señalamiento a organizaciones comunitarias, de manera paralela con la renta criminal.

Los “aparatos organizados de poder con expresiones criminales” obtienen aprendizajes de las formas en las que se desarrolla el conflicto armado que pasan desde el ejercicio de poder y la dominación de un territorio, hasta la obtención de rentas ilegales y el solapamiento en los espacios de participación política (p. 201). Esto conduce a que los actores armados legales e ilegales repliquen formas de violencias de unos y otros, aunque en desigual magnitud y con diferentes objetivos que se detallan por actor en la siguiente tabla (p. 216).

Los “aparatos organizados de poder con expresiones criminales” obtienen aprendizajes de las formas en las que se desarrolla el conflicto armado que pasan desde el ejercicio de poder y la dominación de un territorio, hasta la obtención de rentas ilegales y el solapamiento en los espacios de participación política. ”

El informe aduce, siguiendo a Blair (2014), que la crueldad y el exceso fueron un mecanismo de sometimiento de la población. Los aprendizajes de la guerra también fueron adquiridos por los pobladores, quienes asimilaron memorias de adaptación y silenciamiento, huida o evasión reflejados en no querer saber quién fue el victimario o no encontrar utilidad en denunciarlo. ”

Tabla 1

Predominancia de modalidad de victimización por actor

Grupos paramilitares	Guerrillas y milicianos	Fuerza Pública	Narcotraficantes
Violencias ejemplarizantes Fin: crear reputación violenta (p. 216)	Violencias justicieras y retaliadoras Fin: castigar a quienes van en contravía de los intereses del pueblo (p. 217)	Violencias retaliadoras Fin: Compensar las fallas institucionales y los límites de la legalidad (p. 217)	Violencias justicieras, vengativas y selectivas Fin: someter e intimidar a quienes amenazaban sus intereses (p. 217)
Masacres	Acciones bélicas	Masacres	Atentados terroristas
Torturas	Torturas	Torturas	Secuestros políticos
Amenazas	Amenazas	Ejecuciones extrajudiciales	Asesinatos selectivos
Ajusticiamientos	Asesinatos selectivos	Asesinatos selectivos	
	Reclutamiento de menores	Desaparición forzada	
	Desplazamientos selectivos	Detenciones arbitrarias	
	Daños a bienes		
Pelas			
Secuestros			

Fuente: elaboración propia con base en el informe.

Consideraciones finales

El informe aduce, siguiendo a Blair (2014), que la crueldad y el exceso fueron un mecanismo de sometimiento de la población. Los aprendizajes de la guerra también fueron adquiridos por los pobladores, quienes asimilaron memorias de adaptación y silenciamiento, huida o evasión reflejados en no querer saber quién fue el victimario (p. 207) o no encontrar utilidad en denunciarlo (p. 212).²

Los incalculables de esos aprendizajes de los actores armados y de los pobladores afectados son aquellas “violencias que se callan o esconden” (p. 220): la violencia sexual, la angustia, la enfermedad, las secuelas mentales y psicológicas (p. 220). “Se trata de aquellas que no se narran porque sus manifestaciones y protagonistas se encuentran todavía presentes en el territorio. Son violencias que se evaden porque aún no es el momento de hablar de ciertos temas, es decir, aún no es tiempo para la memoria por lo costosa que esta puede resultar” (p. 221) o porque avergüenza haberlas vivido, quieren ser olvidadas o no pueden ser cuantificadas porque el daño es moral, o el subregistro es muy alto.

“Con la información registrada en la base de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH es difícil ubicar espacialmente las comunas donde se presentó el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la violencia sexual, la desaparición forzada, el secuestro y el daño a bienes, pues los casos que registran el lugar de ocurrencia del hecho no sobrepasan el 20 %. Sin embargo, los registros con información sobre las víctimas de los asesinatos selectivos ubican el lugar de ocurrencia en un 73 % de los casos; en el caso de las víctimas de masacres el registro alcanza el 65 %; y en el caso de las víctimas de acciones bélicas llega al 55 %.” (p. 210). Es decir, presumiendo un subregistro alto, el informe expone ya cifras aberrantes.

Vale la pena valorar que muchas de estas cifras hayan sido desagregadas por género. En ellas es evidente que los hombres han sido los más afectados de este conflicto armado, aunque podría decirse también, los actores principales en cuanto a homicidios, masacres, acciones bélicas, secuestro, desaparición forzada, reclutamiento de menores. Las mujeres y la población LGBTI, en cambio, son las más transgredidas en cuanto a violencia sexual, que en todos los casos está acompañada de tortura (p. 227 - 253). Aunque no se documenta en el informe, probablemente el desplazamiento también aqueja de manera más amplia a las mujeres, pues muchas se marchan de un barrio a otro como resultado de una victimización previa en la que ha muerto algún hombre cercano.

Ciertos factores intervinientes que agudizan el conflicto armado en algunas comunas (especialmente la 1, la 13 y la 3) tienen que ver con “la calidad de la intervención estatal, la presencia de actores armados y grupos criminales previos, el bienestar al que podían acceder los pobladores, y la evaluación que los actores armados hacían del territorio por su posición estratégica e histórica” (p. 207).

En las narraciones de las víctimas no logra verse la magnitud y conmoción que expresan las fuentes secundarias. La escasez de la descripción en los testimonios da cuenta o de la forma en que se pregunta o de lo que creo es más evidente, la dificultad de construir relatos de memoria. Incluso puede afirmarse que en aquellos relatos donde se asoma la descripción de lo sucedido (especialmente los extraídos de la base de datos del CNMH) tiende uno a repudiar el texto. Es interesante la reflexión que el documento promueve sobre la dificultad de narrar violencias cercanas y la necesidad de la distancia para recordar sin encontrarse amenazado o sentirse vulnerable física o emocionalmente.

Un segundo aprendizaje trascendente para el momento transicional que atraviesa el país, que se deriva de la lectura de esta historia sintetizada, tiene que ver con la urgencia de implementar acciones estatales a escala local que contengan las violencias producto de reacomodamientos por los vacíos de poder, o los aprovechamientos estratégicos de actores de carácter criminal. Dicho de otra manera, a nivel nacional puede disminuir el conflicto armado pero a nivel local algunos actores tienden a reestructurarse.

Ciertos factores intervinientes que agudizan el conflicto armado en algunas comunas (especialmente la 1, la 13 y la 3) tienen que ver con “la calidad de la intervención estatal, la presencia de actores armados y grupos criminales previos, el bienestar al que podían acceder los pobladores, y la evaluación que los actores armados hacían del territorio por su posición estratégica e histórica.”

Finalmente, la exposición pública de la muerte o los castigos ejemplarizantes, las “balas perdidas”, las “fronteras invisibles” muestran la privatización que los actores armados hicieron del espacio público y la incertidumbre colectiva que esto produjo en la población civil. Los habitantes de algunas comunas de la ciudad no se sentían seguros en su barrio, en su vivienda, y tuvieron que restringir la movilidad y trastocar las formas de pertenencia a una comunidad de sentidos. Esto muestra la obligación de reconstrucción de lo público como valor social y del espacio público que ha sido objeto prolongado de violencias o lugar de zozobra o inquina, que recuerda masacres o muertes de los seres queridos.

1. Reseña del capítulo 3 del informe *Medellín: memorias de una guerra urbana*. (2017). Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, Corporación Región, Ministerio del Interior, Alcaldía de Medellín, Universidad Eafit, Universidad de Antioquia.

2. En el capítulo *Memorias de resistencia y sobrevivencia* el lector encontrará otros aprendizajes asociados a la defensa y reclamación de derechos que le da un matiz importante a esta afirmación.

Referencias bibliográficas

—El Colombiano (2017). 15 años de Orión, cuando la guerra llegó a la ciudad. En línea: <http://m.elcolombiano.com/especiales/operacion-orion#creativosComunaRecuperado> el 10 de octubre de 2017.

—Centro Nacional de Me-

moria Histórica (2017). *Medellín: memorias de una guerra urbana*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, Corporación Región, Ministerio del Interior, Alcaldía de Medellín, Universidad Eafit, Universidad de Antioquia.